

trado al servicio de las armas con plena voluntad, y

2º Que estando condenado Panduro á una prision de solo un año del que llevaba vencido mes y dias, no es verosímil que haya prestado su consentimiento para servir de soldado en un cuerpo permanente siendo casado.

Por tales consideraciones, y apoyado este juzgado en el art. 105 de la Constitucion general y en la ley de 20 de Enero de 1869, se falla con las proposiciones siguientes:

Primera; La justicia de la Union ampara y protege á Gregorio Panduro por haberse violado en su contra el art. 5º de la Constitucion general de 1857.

Segunda; Notifiquese esta sentencia, publíquese en el Boletin oficial del Estado y remítase este expediente á la Corte Suprema de Justicia para los fines de la ley.

El juez de Distrito lo sentenció y firmó.

(Firmado.) O. I. Trejo.—G. J. Gallegos.»

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio diez y siete de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Guadalajara por María Francisca Gonzalez, á nombre de su esposo Gregorio Panduro contra el C. Gefe político de esa ciudad, que lo consignó al servicio de las armas en el 11º batallon de línea; y considerando: que en el expediente aparece probado que Panduro fué sentenciado por la 3ª sala del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, á la pena de un año de prision: que por orden de la Gefatura política de Guadalajara, salió despues al servicio de las armas; y que no presta ese servicio con su voluntad, lo cual importa la violacion de la garantía á que se refiere el art. 5º de la Constitucion federal; se decreta: que se confir-

ma la sentencia pronunciada el 17 de Junio próximo pasado por el Juez de Distrito de Guadalajara que ampara á Gregorio Panduro, y se declara: que la justicia de la Union lo ampara y protege contra el acto por el que se le tiene prestando servicio en el undécimo batallon de línea.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de Guadalajara con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que forman el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—J. M. Lafragua.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Son copias que certifico. México, Julio diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.—Lic. Agustín Peralta, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Guadalajara por D. Carlos M. Arana, apoderado de D. Manuel de la Pedreguera Romero de Terreros, contra el Juez 1º de primera instancia de Colima, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 1º de 1ª instancia.

El Gefe superior de Hacienda, haciendo veces de Promotor fiscal, expono: que á su juicio y como ya otras veces lo ha indicado y sostenido, no cabe en negocios judiciales el recurso de amparo, pues terminantemente lo dispone así el art. 8º de la ley re-

lativa de 20 de Enero de 1869, y en ningún caso como el presente, militan razones tan poderosas para defender la justicia de esta prevención de la ley; pues tratándose de una providencia dictada en virtud de un juicio seguido por todos sus trámites; ante una autoridad competente, es evidente que la parte que ha pedido el amparo, tenía espedidos los recursos ordinarios y extraordinarios que conceden las leyes sobre administración de justicia.

La admisión, pues, del recurso de amparo en negocios de esta naturaleza, y la suspensión de una providencia como la de que hoy se trata, equivale, en concepto del que suscribe, á hacer nula la jurisdicción de los Tribunales del Estado é ilusorias las leyes que determinan sus facultades y arreglan sus procedimientos.

Pero dejando aparte esta cuestión, y suponiendo que debiera admitirse en este negocio el recurso de amparo de garantías, en concepto del infrascrito, la providencia del C. Juez 2º de 1ª instancia que ha motivado esta reclamación, no ha violado los artículos constitucionales que cita el interesado en su ocursio que tengo á la vista. No el artículo 16, porque no se trata de la ocupación arbitraria de las posesiones del Sr. Pedreguera, sino de cumplir una sentencia pronunciada en juicio sumarísimo por una autoridad competente.

Podrá esto juicio y esta sentencia adolecer de las nulidades é injusticias que numera el quejoso; pero no corresponde su remedio á la justicia federal: la ley de administración de justicia del Estado, lo mismo que las de todos los de la Federación, demarcan, en casos como el presente, todos los recursos y garantías apetecibles. No el artículo 27, por las mismas razones expuestas y porque indudablemente aquí no se trata de una expropiación sino de restituir interinamente una posesión con arreglo á las leyes que establecen y garantizan el derecho de propiedad.

Por todo lo expuesto y absteniéndose de

otras argumentaciones que no se escaparán al ilustrado criterio del C. Juez que va á resolver; fundado en los mismos artículos constitucionales citados y en el 8º de la ley de 20 de Enero también citada: por el digno conducto de vd.

Al Juzgado de Distrito pido se sirva declarar: que la justicia federal no ampara al C. Carlos M. Arana por la providencia del C. Juez 2º de 1ª instancia, que manda dar posesión á la Quescoria del agua de que se dice despojado.

Colima, Mayo diez y nueve de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—*J. Guillermo Llano.*

Sentencia del Juzgado de Distrito.

Guadalajara, Junio veintiseis de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: D. Carlos M. Arana como apoderado de D. Manuel de la Pedreguera, pidió á este juzgado por telégrama de 9 de Mayo último, amparo de garantías contra el juez 2º de 1ª instancia de Colima, asegurando que este funcionario resolvió despojar al Sr. Pedreguera de la posesión antigua que, como propietario, tenía en su hacienda de Montitlan; que verificándose el despojo sin citación ni audiencia, se violaban las garantías que otorgan los artículos 16 y 27 de la Constitución federal; y apoyaba su ocursio en la fracción 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, pidiendo además, que por la urgencia del caso, se mandara suspender telegráficamente el acto reclamado (Documento telegráfico de fojas 24 de estos autos.)

Este juzgado creyó posible la violación, y sin motivo suficiente para dudar del aserto de Arana, decretó luego la suspensión del acto reclamado, para evitar la consumación de la violación ordenada por la autoridad, según la aseveración del quejoso. En seguida se comunicó la providencia de este juzgado al juez 1º de 1ª instancia

de Colima, para que la mandara cumplir y previniera al quejoso, que inmediatamente formalizara ocurno de amparo de garantías sobre la violacion de que se trataba; igualmente se encargaba al juez 1º, que sustanciara el juicio y diera cuenta con él en estado.

En 10 del mismo Mayo formalizó Arana su ocurno ante el juez comisionado, quien pidió al 2º de 1ª instancia de Colima el correspondiente informe con justificacion, que rindió: el Gefe superior de Hacienda de aquella capital evacuó, tambien, el traslado que se le corrió por tres dias haciendo veces de Promotor fiscal: el actor rindió las pruebas que creyó convenientes, y ya sustanciado así el juicio, remitió el juez comisionado los autos á este juzgado de Distrito con citacion para sentencia.

De las constancias judiciales resulta:

Que no está probada la violacion de garantías de que se ha quejado D. Carlos M. Arana contra el juez 2º de 1ª instancia de Colima.

El informe con justificacion de esto funcionario pone de manifiesto que él, conoció de un interdicto sumario de posesion; mas ni de su informe ni de los justificantes á él adjuntos, ni de las pruebas rendidas por Arana en el presente juicio, se puede inferir que hubo violacion de garantías constitucionales; habrá ó no irregularidades en el procedimiento del juicio sumario; será ó no justa la sentencia en él pronunciada; pero lo cierto es, que no aparece probada la violacion de garantías constitucionales de que se ha quejado el Sr. Arana: por tanto, y considerando:

Primero; Que el juzgado tiene el deber estricto de no amparar cuando no hay violacion y de amparar cuando la hay.

Segundo; Que ésta no puede consistir sino en hechos que solo en el juicio especial de amparo se pueden esclarecer, y no en otro, razon porque se hizo necesario que una vez puesta la queja de violacion, fundada en hechos posibles y mientras no fue-

ra desmentida, se hacia necesario mandar suspender el acto reclamado, y que luego se formalizara el ocurno de amparo.

Tercero; Que puesta esa necesidad, bien pudo satisfacerse por el telégrafo á fin de evitar que se consumara la violacion, por ser esta evidentemente, un mal de mayor gravedad que el de decretar la suspension.

Cuarto; Que si la queja ha resultado falsa, no por eso puede decirse que debió desecharse antes de saber si era ó no así, aun cuando se sospechara este segundo extremo porque en caso de duda mejor es que la constitucion no se viole.

Considerando por fin: que justa ó injusta la sentencia del Juez que conoció del interdicto, regulares ó no sus procedimientos, no toca á este juzgado de Distrito enmendar tales errores, sino solo amparar cuando se violan las garantías individuales por cualquiera autoridad, segun lo prescribe la Constitucion de 1857, cuya violacion no existe en el presente caso.

Por todos los fundamentos de que se ha hecho merito, falla el mismo juzgado con las proposiciones siguientes:

Primera; la justicia de la Union no ampara ni protege á D. Manuel de la Pedreguera en las garantías de los artículos 16 y 17 de la Constitucion general, que su representante dice le han sido violadas, por no estar probada la violacion.

Segunda; Notifíquese esta sentencia, publíquese en los periódicos y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El Juez 1º suplente de Distrito lo sentenció y firmó (firmados).—José M. Gutierrez Hermosillo.—G. J. Gallegos.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido an-

te el Juzgado de Distrito de Guadalajara, por D. Carlos M^a Arana, apoderado de D. Manuel de la Pedreguera Romero de Terreros, contra el Juzgado de 1^a instancia de Colima, que trata de hacer efectiva la sentencia de amparo de posesion, pronunciada en el juicio seguido ante él, y promovido por Doña María del Refugio Ochoa contra el peticionario, sobre las aguas de los arroyos y el naranjo salado que nacen en la hacienda de Montitlan, alegando, que con el hecho de la posesion, sin haberse guardado los requisitos de las leyes y que señala en su demanda de amparo, se violan por el Juez de lo civil las garantías que otorgan los artículos 16 y 27 del pacto fundamental de la República.

Vistos los documentos presentados por la autoridad contra quien se solicita el recurso; el parecer del ministerio público; las pruebas presentadas por el quejoso y cuanto mas convino.

Considerando: que el Juzgado 2^o de letras de Colima, al conocer del interdicto de despojo entablado por la Señora Ochoa, contra D. Carlos M. Arana, hasta pronunciar sentencia, lo ha hecho en virtud de su oficio, y que al proceder á su ejecucion, ha obrado en el círculo de sus atribuciones, sin que aparezca en las diligencias remitidas al Juzgado de Distrito, ni en las pruebas presentadas por el quejoso, violacion alguna de las garantías consignadas en los artículos 16 y 27 de la carta federal de la República; y

Considerando finalmente: que D. Carlos M. Arana, tiene sus derechos á salvo para hacerlos valer, como lo está haciendo, en el juicio que le ha promovido la Señora Ochoa. Por tales fundamentos se decreta:

Primero; que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Guadalajara, que declara, en nombre de los poderes de la Union, que no ampara ni protege á D. Manuel de la Pedreguera Romero de Terreros, en las garantías que otorgan los artículos 16 y

27 de la Contitucion general, que su apoderado dice lo han sido violadas, por no estar probada la violacion.

Segundo; con arreglo al art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se impone al quejoso una multa de doscientos pesos.

Tercero; lo acordado.

Cuarto; devuélvanse las actuaciones al Juzgado remitente, con copia certificada de este fallo para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M^a Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Julio veinticuatro de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustin Peralta* oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa seguida en el Juzgado de 1^a instancia de Ameca (Jalisco) contra Francisco Zamora por monedero falso.

PEDIMENTO

DEL C. PROMOTOR FISCAL DEL TRIBUNAL DE CIRCUITO DE GUADALAJARA.

Señor Magistrado.

El Promotor fiscal dice:

Esta causa fué sustanciada en el Juzgado de 1^a instancia de Ameca, por falsificacion de moneda, contra Francisco Zamora, soltero, de veinticinco años, de ejercicio carpintero, originario de C. Guzman y vecino de esta ciudad. El propio Juzgado conociendo á prevencion de ese delito, determinó el proceso condenando al reo á cinco años de presidio.